

Santiago, doce de abril de dos mil veintidós.

Vistos:

En estos autos Rol C-30817-2019 del Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, sobre juicio ordinario de mayor cuantía, caratulados “Carreño con Fisco de Chile”, con fecha cinco de enero del año en curso, se dictó sentencia definitiva, la que acogiendo las excepciones de pago, reparación integral y prescripción opuestas por la defensa fiscal, rechazó la demanda, sin costas.

En contra de ese fallo, la parte demandante dedujo recursos de casación en la forma y de apelación, disponiéndose traer los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

Primero: Que el recurso de casación en la forma se sustenta en la causal contenida en el número 5 del artículo 768, en relación al N° 4 del artículo 170, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, al estimar que la sentencia omite las consideraciones de hecho y de derecho para resolver el asunto controvertido al rechazar la demanda por dos razones que son incompatibles entre sí, anulando de esta forma los argumentos que entrega para desestimar su acción, toda vez que al acoger la excepción de pago y reparación integral, no resultaba procedente que se pronunciara de la restante alegación efectuada por el Fisco de Chile, yerro que habría influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia.

Segundo: Que la sentencia, de acuerdo con el número 4° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, en relación a los números 5° a 9° del Auto Acordado de la Corte Suprema de Justicia de 30 de septiembre de 1920, debe contener las consideraciones de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, exigencia que, como se ha sostenido por ese tribunal, tiende a asegurar la justicia y la legalidad de los fallos y a proporcionar a los litigantes los antecedentes que les permitan conocer los motivos que determinaron la decisión del litigio para la interposición de los recursos por medio de los cuales fuere posible su modificación o invalidación.

Tercero: Que el aludido recurso de casación será desestimado sin mayores dilaciones, teniendo presente para ello que, a diferencia de lo que sostiene el recurrente, la sentencia cumple con las prescripciones del mencionado artículo 170 en lo tocante a contener las consideraciones de hecho que le sirven de basamento –y que apuntan (en una relación



consecuencial) en dirección a la decisión que en ella se adoptó-, dado que una cosa es que los fundamentos aportados por el sentenciador no satisfagan las expectativas del litigante, y otra muy distinta que el fallo carezca de fundamentación.

En la especie, lo cierto es que la sentencia materia de reproche contiene los fundamentos básicos en virtud de los cuales la jueza del *a quo* arribó a su convicción definitiva y, en lo concreto, en sus considerandos 4° y siguientes, analizó la prueba aportada al juicio y entregó las motivaciones por las cuales acogió las excepciones opuestas por la defensa fiscal.

Cuarto: Que, por lo demás, no debe olvidarse que la casación formal es una herramienta recursiva procesal que debe ser utilizada sólo cuando el perjuicio ocasionado al litigante sea únicamente reparable con la declaración de nulidad, empero en la situación *sub lite* la reparación podría, eventualmente, alcanzarse mediante la apelación que el impugnante también ha ejercido conjuntamente con aquélla.

Quinto: Que, entonces, en el escenario propuesto, el recurso en comento, no puede prosperar.

II.- En cuanto al recurso de apelación:

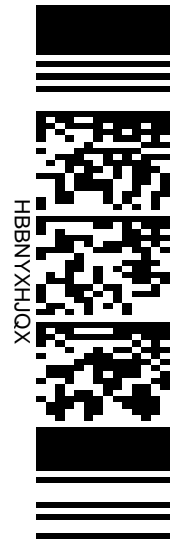
Se eliminan de la sentencia, en análisis, los fundamentos décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y vigésimo primero a trigésimo séptimo:

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Sexto: Que del examen de los escritos de discusión, fluye que la tesis fáctica propuesta, respecto de la detención ilegal, torturas y persecución política sufridas por Nelson Gumerindo Carreño Encina, producto de la acción de agentes del Estado, verificadas durante el denominado “régimen militar”, son hechos no controvertidos.

En línea con lo anterior, no se rebate que por esos motivos el actor fue calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech.

Por lo que, se tiene por establecido definitivamente y desde ya que el señor Carreño Encina fue víctima de detención ilegal, torturas reiteradas y persecución política en los años 1975, 1976 y 1977, por decisión y mano de agentes del Estado, siendo dicho acto constitutivo de un crimen de lesa humanidad.



Séptimo: Que, en cuanto a las excepciones de reparación integral y pago opuestas por el Fisco, cabe hacer presente que la defensa del actor no contravino haber recibido los beneficios y transferencias que señala el demandado en su contestación, por ser una consecuencia necesaria del hecho de haber sido incluido en la nómina del informe realizado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Sin perjuicio de lo anterior, no debe olvidarse que el hecho fundante de la responsabilidad pretendida es un delito de lesa humanidad, esto es, aquellos actos que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad considera cometidos *“como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”*, incluyendo asesinato, exterminio, prisión arbitraria, violación, tortura, persecución política, desaparición forzada y otros actos inhumanos graves, calificación jurídica que no fue objeto de debate entre las partes, motivo por el cual se debe atender a los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos, integrados a nuestra legislación interna por disposición del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de las víctimas y otras personas a obtener la reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, puesto que *“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”*.

En este sentido, conviene recordar que los artículos 1.1 y 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica, publicado el 5 de enero de 1991, establecen lo siguiente:

“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.



Por lo tanto, se constata una clara divergencia entre el contenido de las excepciones señaladas y lo dispuesto por la Convención Americana, debiendo estarse a esta última, atendida la naturaleza del ilícito, por cuanto la responsabilidad del Estado queda sujeta -en estos casos- a las reglas del derecho internacional, que excluyen –en todo aquello que sean contrarias a éste- las del derecho interno.

En consecuencia, atendido además que las leyes invocadas por la defensa fiscal no establecen verdaderas indemnizaciones sino que un conjunto de derechos y/o beneficios para las víctimas y sus familiares, como ocurre con las pensiones de reparación, medidas con las que el Ejecutivo y el Legislativo han intentado progresivamente hacerse cargo de un problema esencialmente humanitario, político y, en definitiva, histórico, no se avizora la existencia de incompatibilidad alguna con la indemnización pretendida en sede judicial, por ser diferente, siendo importante consignar que no está prohibido otorgarla y que así se ha hecho en múltiples sentencias.

Octavo Que en consecuencia, la acción de indemnización por daño moral impetrada en caso alguno resulta incompatible con cualquier otro tipo de beneficio que pudiesen haber favorecidos a las actoras, a cualquier título y en cualquier momento.

Noveno: Que, en lo que respecta a la excepción de prescripción extintiva de la acción y para desestimarla basta considerar que en esta materia es improcedente recurrir a la aplicación de las normas internas previstas en el Código Civil. Se trata de crímenes de lesa humanidad, toda vez que estos hechos se enmarcan en una vulneración grave, sistemática y masiva de los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces, cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éstos.

Décimo: Que, en forma reiterada la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como delitos de lesa humanidad los cuales no prescriben, por lo que resultaría incoherente entender que la acción de reparación está sujeta a normas de prescripción, puesto ello vulnera los principios del Derecho Internacional que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de la mayor gravedad, tal como se establece en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, numerando quinto, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, de fecha



28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en especial su capítulo segundo.

Undécimo: Que a lo anterior se agrega que el Estado de Chile ratificó la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como es la de reparación integral del daño, norma, que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5º de la Constitución Política del Estado.

Décimo segundo: Que así las cosas, de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos la acción es imprescriptibilidad, sin distinción entre acciones penales y civiles, razón por la cual la excepción en análisis debe ser rechazada.

Décimo tercero: Que, así las cosas, descartadas las excepciones opuestas por la demandada, cabe destacar que respecto del daño moral la Excm. Corte Suprema lo ha conceptualizado como: *“un mal, un perjuicio o una aflicción en lo relativo a las facultades espirituales, vale decir, cuando se ocasiona a una persona un dolor o aflicción en sus sentimientos”* (R.D.J., T. LXVIII, secc. 4ª, pág. 168). Asimismo, ha sentenciado lo siguiente: *“Que el daño moral, como todo daño, debe ser probado por quien sostiene haberlo padecido; al menos cuando es la base de la obligación de repararlo, conforme al artículo 1698 del Código Civil. Sin embargo, en determinadas situaciones, por la naturaleza y características del daño material producido, particularmente cuando se trata de daño corporal, el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo. Así también ha sido resuelto (por ejemplo, Corte Suprema, rol 735-2015). En estas circunstancias se produce una alteración del peso de la prueba en cuanto, debiendo la víctima probar el daño, es el demandado quien tendría que probar que, debido a ciertos hechos o circunstancias, la víctima no sufrió efectivamente el daño que postula”* (Rol N° 12.176-2017).

Pues bien, el presente caso es justamente uno de aquellos en que *“el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo”*. En efecto, se trata del caso de un joven que de improviso y con gran violencia fue detenido en tres oportunidades y llevado a un cuartel en el que debió soportar crueles y reiteradas torturas, consistentes en maltratos físicos y psicológicos, inclusive descargas de corriente, agresiones amedrentándolo con seriedad y gravedad suficiente para que se



representara que su vida corría un peligro real, experiencia que le provocó un quiebre emocional, completamente esperable.

Tales tratos, por cierto degradantes, que son consecuencia del actuar coercitivo de agentes del Estado, cuyo deber funcionario en ningún caso ni momento validó la adopción de procedimientos y medidas como las operadas en esta persona, abusando de una posición de poder y engendrando en la víctima una sensación de vulneración, despojo e incertidumbre persistente, que razonablemente no pueden tenerse como inermes o carentes de carga emocional, son un elemento definitivamente esclarecedor de lo que podría retratarse como una auténtica desdicha personal, por lo que al tenor de lo que disponen los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, se presume que el actor fue lesionado en su esfera inmaterial y en magnitud importante, puesto que los abusos que sufrió terminaron por consumirlo en la desazón.

No podría concluirse de otra manera, desde que el Estado de Chile ha reconocido oficialmente al demandante como víctima de prisión política y tortura, a partir de lo cual y en conjunto con los otros antecedentes adjuntados al proceso, y, especialmente, que estos hechos no fueron cuestionados en el juicio en cuanto a su ocurrencia, solo cabe creer en la versión entregada, y en relación al dolor moral invocado, tenerlo por serio y grave, por no poder esperarse otra cosa.

Décimo cuarto: Que en cuanto a la evaluación de los perjuicios morales cabe tener en consideración que la afectación del demandante en su dimensión espiritual, que se aprecia como permanente, se concluye en justicia el otorgamiento de una satisfacción de reemplazo, que en prudencia y equidad, a la luz del mérito de los antecedentes, se determina en la suma única y total de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos).

Décimo quinto: Que las sumas que se ordenan pagar lo serán debidamente reajustadas de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de ejecutoria de esta sentencia y su pago efectivo, más intereses corrientes para operaciones no reajustables a contar de la fecha de la mora.

Décimo sexto: Por considerar que la demandada litigó con motivo plausible se la exime del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en las normas legales citadas, y en los artículos 186 y siguientes, 764, 765, 766, y 798 del Código de Procedimiento Civil:



I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

Se **rechaza** el recurso de casación en la forma deducido por la parte demandante en lo principal de su presentación.

II.- En cuanto al recurso de apelación:

Se **revoca**, la sentencia de cinco de enero de dos mil veintidós, y en su lugar, se declara:

1.- Que **se rechazan las excepciones** de reparación integral, pago y prescripción alegadas por la demandada.

2.- **Que se acoge la demanda** y se condena al Fisco de Chile a pagar al actor la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral.

3.- Que la suma ordenada **pagar devengará reajustes e intereses** en la forma dicha en el fundamento décimo quinto de este fallo.

4.- Que **no se condena al Fisco** a pagar las costas de la causa.-

Regístrese y devuélvase.

Redacción de la Ministro señora Hasbun.

No firma el Abogado Integrante señor Montt, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Ingreso Corte N° 969-2022 Civil



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel Muñoz P., Paola Danai Hasbun M. Santiago, doce de abril de dos mil veintidós.

En Santiago, a doce de abril de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

